

RESOLUCIÓN N° DP-CAF-DASJ-2023-160

Mgs. Noemí Mogollón Ruiz
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, conforme lo establecen los artículos 191 de la Constitución de la República y 285 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”*;

Que, conforme el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define: *“Definiciones.- 1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley”*;

Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dice: *“Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de esta Ley”*;

Que, el artículo 218 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: *“Procedimiento en caso de que la entidad contratante sea arrendataria.- En el caso de que las entidades contratantes sean arrendatarias se seguirá el siguiente procedimiento y condiciones: 1. Las entidades contratantes publicarán en el portal COMPRAS PÚBLICAS el pliego en el que constará las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo. Adicionalmente deberá publicar la convocatoria en la página web de la institución, o el uso de otros medios de comunicación que se considere pertinentes, sin perjuicio de que se puedan efectuar invitaciones directas; 2. La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor oferta tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el precio del canon arrendaticio; 3. El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base de los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble; 4. El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y destino que se le dará; y, 5. Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores RUP.”*;

Que, el artículo 220 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: *“Normas supletorias.- En todo lo relacionado a la selección del arrendador o arrendatario por parte de las entidades contratantes enlistadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se aplicarán los requisitos y procedimientos que determine el Servicio Nacional de Contratación Pública, las normas contenidas en la Codificación del Código Civil, la Codificación de la Ley de Inquilinato y el Código de Comercio.- En la fase de ejecución contractual se estará a lo dispuesto en la Ley de inquilinato.- Lo no previsto en el contrato ni en la Ley de Inquilinato se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.”*;

Que, mediante Resolución N° RE-SERCOP-2023-0134 de 1 de agosto de 2023, se expidió la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para la aplicación de los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley y su Reglamento General, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

Que, mediante Resolución N° DP-CAF-DASJ-2023-151 de 9 de noviembre de 2023, suscrita por la Mgs. Fanny Noemí Mogollón Ruíz, Coordinadora General Administrativa Financiera, procedió a *“(...) Autorizar el inicio de proceso y aprobación de los pliegos correspondientes al Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles No. ARBI-DP-2023-008, para la contratación del “ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD”, con un valor de USD 7.536,48 (Siete mil quinientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América, con 48/100), sin incluir IVA; con un canon mensual referencial de arrendamiento, preparado por la Defensoría Pública, que asciende a USD 628,04 (Seiscientos veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América, con 04/100), sin incluir IVA, y el plazo establecido para esta contratación será desde el 01 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024 renovable por un año adicional en las mismas condiciones, previo informe del Administrador del contrato, el requerimiento y certificación de existencia y disponibilidad de fondos emitido por la Dirección Financiera.”*;

Que, el 9 de noviembre de 2023, se publicó el respectivo Proceso de Arrendamiento de Bienes Inmuebles N° ARBI-DP-2023-008 en el portal www.compraspublicas.gob.ec., y mediante publicación realizada el 07 de noviembre de 2023 en el diario el Telégrafo;

Que, el señor Manuel Antonio Salazar Robalino, responsable de la etapa precontractual del Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, signado con el código N° ARBI-DP-2023-008, conforme consta del ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NRO. ARBI-DP-2023-008 “ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD”, de 16 de noviembre de 2023, concluye: *“Efetuada la evaluación, se concluye que la oferta presentada por la Sra. CARMEN NARCISA VAYAS LARA, cumple con los requerimientos técnicos, económicos y legales que demanda la Defensoría Pública.”*;

Que, mediante memorando N° DP-DA-2023-3035-M de 16 de noviembre de 2023, el señor Manuel Antonio Salazar Robalino, responsable de la etapa precontractual del

Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, signado con el código N° ARBI-DP-2023-008, recomienda a la Mgs. Fanny Noemí Mogollón Ruíz, Coordinadora General Administrativa Financiera, lo siguiente: “(...) *la adjudicación del procedimiento a favor de la Sra. CARMEN NARCISA VAYAS LARA por cumplir con los requerimientos técnicos, económicos y legales que demanda la Defensoría Pública, considerando un canon mensual de \$ 628,04 más IVA y un valor anual de \$ 7.536,48 sin incluir el IVA; considerando a un plazo desde el 1 de Diciembre de 2023 hasta el 30 de Noviembre de 2024 renovable por un año adicional en las mismas condiciones.*”;

Que, con memorando N° DP-CAF-2023-0912-M de 16 de noviembre de 2023, la Mgs. Fanny Noemí Mogollón Ruíz, Coordinadora General Administrativa Financiera, solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica, lo siguiente: “(...) *se recomienda la adjudicación del procedimiento a favor de la Sra. CARMEN NARCISA VAYAS LARA por cumplir con los requerimientos técnicos, económicos y legales que demanda la Defensoría Pública, considerando un canon mensual de \$ 628,04 más IVA y un valor anual de \$ 7.536,48 sin incluir el IVA; considerando a un plazo desde el 1 de Diciembre de 2023 hasta el 30 de Noviembre de 2024 renovable por un año adicional en las mismas condiciones, por lo tanto solicito se proceda con la elaboración de la resolución correspondiente.*”;

En ejercicio de la delegación constante en los artículos 4 literal a) y 5 de la Resolución No. DP-DPG-DASJ-2022-119 de 15 de septiembre de 2022; así como al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley.

RESUELVE:

Artículo 1.- Adjudicar a la señora CARMEN NARCISA VAYAS LARA, con RUC No. 1707046197001, el ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, que es materia del Procedimiento Especial de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, signado con el código N° ARBI-DP-2023-008, por un valor de USD 7.536,48 (Siete mil quinientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América, con 48/100), sin incluir IVA; con un canon mensual referencial de arrendamiento, preparado por la Defensoría Pública, que asciende a USD 628,04 (Seiscientos veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América, con 04/100), sin incluir IVA, y el plazo establecido para esta contratación será desde el 01 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024 renovable por un año adicional en las mismas condiciones, previo informe del Administrador del contrato, el requerimiento y certificación de existencia y disponibilidad de fondos emitido por la Dirección Financiera.;

Artículo 2.- Disponer a la Jefatura de Compras Públicas la publicación de la presente Resolución a través del portal: www.compraspublicas.gob.ec de conformidad con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se proceda a la respectiva notificación.

Artículo 3.- Remitir la documentación pertinente a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública, para la elaboración del contrato correspondiente.

Artículo 4.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución a la Dirección Administrativa de la Defensoría Pública en el ámbito de sus competencias.

Disposición final.- Disponer a Secretaría General realizar el trámite correspondiente de acuerdo al ámbito de sus competencias.

Cumplase.-

Emitida y suscrita en la Defensoría Pública, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de noviembre de 2023.

Mgs. Noemí Mogollón Ruiz
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Elaborado por:	Ab. María Elena Vinueza C. Experta Jurídica 2	
Revisado por:	Ab. Marco Maldonado C. Director de Asesoría Jurídica	